

Resultando que presentada en el Registro primera copia de la mencionada escritura fué calificada con nota del tenor literal siguiente: «Denegada la inscripción del documento que precede por observarse los siguientes defectos: 1.º no justificarse la toma de razón en el Ayuntamiento de Rubí, a efectos del arbitrio de plusvalía; 2.º no detallarse en la descripción de la finca segregada y vendida, si el lindero del frente es un camino conocido por un nombre o es un camino que sirve de separación con otra finca y, en este caso, la naturaleza de la misma y el nombre y apellidos de su propietario; ni consignarse la naturaleza de la finca lindante por su derecha entrando ni el 2.º apellido del titular de ésta; 3.º no describirse el resto de la finca matriz en la forma prevenida en los artículos 47 y 50 del Reglamento Hipotecario que exigen como mínimo, además, del lindero por donde se efectúa la segregación, como consta en la escritura, la modificación de su extensión, no bastando a este efecto decir: cuya superficie queda disminuida en la extensión de la porción segregada; 4.º no salvarse en forma los añadidos y enmiendas que se realizan en la copia presentada después de estampar el Doy Fe de la misma. Se consideran tales defectos como subsanables, no tomándose anotación de suspensión por no solicitarse».

Resultando que el Notario autorizante del instrumento interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación y alegó que deja aparte el 1.º de los defectos señalados a pesar de que el propio Registrador ha inscrito centenares de escrituras sin tal requisito poniendo nota de afección del citado arbitrio; que en cuanto al 2.º defecto, la resolución de 11 de marzo de 1879 dice que está bien expresado el lindero cuando se indica que la finca linda con un camino sin mencionar el nombre; de éste ni ninguna otra circunstancia; que sin embargo, el Registrador no sólo exige se diga el nombre del camino sino también la naturaleza de la finca y el nombre del titular de la situada al otro lado del mismo; que el criterio científico y jurisprudencial sobre este punto es de la máxima tolerancia como demuestran las Resoluciones de 7 de enero de 1893, 26 de marzo de 1909 y 18 de octubre de 1911, entre otras; que el defecto 3.º achaca a la escritura una supuesta infracción de los artículos 47 y 50 del Reglamento Hipotecario cuando precisamente se han cumplido con rigor sus normas como puede comprobarse a la vista de su texto y de la resolución de 23 de octubre de 1965; que la práctica notarial y registral es constante en la admisión de segregaciones con menos requisitos que los contenidos en la escritura calificada; que la dureza de la calificación parece que no tiene más finalidad que obstaculizar la labor del Notario autorizante de la escritura; y que el modo de salvar las correcciones o enmiendas, está regulado por el artículo 243 del Reglamento Notarial y se han cumplido con exceso sin que entienda que quiere decir el Registrador con su expresión de salvar «en forma».

Resultando que el Registrador informó: Que no es cierto que haya admitido centenares de escrituras sin la toma de razón en el Ayuntamiento a efectos del pago del arbitrio de plusvalía, y aunque este defecto no es objeto de recurso, quiere hacerlo constar; que en cuanto al 2.º defecto, el artículo 51 del Reglamento Hipotecario no sólo exige que se expresen en la descripción de las fincas sus linderos por los cuatro puntos cardinales, sino también la naturaleza de las colindantes y cualquier otra circunstancia que impida su confusión; que el consignar como lindero un camino sin especificar nombre, no aclara lo suficiente por lo que es necesario señalar otras circunstancias que eviten confundir con otra la finca que se inscribe; que la obligación de expresar la naturaleza de la finca colindante no es un capricho del calificador sino una exigencia legal que no se puede considerar derogada por una corruptela tolerada a veces por circunstancias especiales; que el no consignar el segundo apellido del dueño de una finca colindante es otro defecto que impide la perfecta identificación de la que se pretende inscribir; que el criterio de tolerancia seguido por otros Registradores no obliga al funcionario calificador, como tiene declarado la Resolución de 18 de noviembre de 1960; que en cuanto al tercer defecto los artículos 47 y 50 del Reglamento Hipotecario exigen que se consignen como mínimo, en cuanto al resto de la finca matriz, no sólo el lindero por donde se efectúa la segregación sino también la modificación en su extensión, y esta exigencia no puede estimarse cumplida con la manifestación de que la superficie de la misma queda disminuida en la extensión de la porción segregada, sino que debe expresarse con arreglo al sistema métrico decimal, según el espíritu de la Resolución de 23 de octubre de 1965; y que, en cuanto al 4.º defecto, en el caso de subsanación de errores observados después de poner el Doy Fe, debe procederse como previenen las últimas palabras del artículo 243 del Reglamento Notarial cuando habla de nota posterior autorizada de igual modo que la copia, criterio seguido por la Resolución de 27 de noviembre de 1929, siendo también digna de mención en este punto la de 1.º de febrero de 1890.

Resultando que el Presidente de la Audiencia revocó la nota del Registrador en cuanto a los defectos recurridos, por razones análogas a las expuestas por el Notario recurrente, considerando que el riguroso criterio registral se debe a motivos personales contra el fedatario, como pudo apreciar ya en otro recurso planteado entre los mismos funcionarios, lo cual puede provocar una corriente desinscribitoria, razón por la cual deben imponerse las costas al funcionario calificador.

Vistos los artículos 9 de la Ley Hipotecaria, 47, 50 y 51 de su Reglamento, 153 y 243 del Reglamento Notarial y las Resoluciones de este Centro de 7 de enero de 1893, 26 de marzo de 1909, 18 de octubre de 1911 y 21 de marzo de 1973.

Considerando que en el presente recurso se plantean algunas de las cuestiones que han sido ya resueltas por este Centro Directivo en la Resolución de 21 de marzo de 1973, en que se declaró que no es motivo suficiente para suspender una inscripción la circunstancia de que en la descripción del inmueble contenida en la escritura calificada no se expresa la naturaleza de los predios colindantes, tal como se establece en el artículo 51 del Reglamento Hipotecario o se omitiese el segundo apellido de los titulares de las mismas, —requisito no exigido en ninguna disposición legal o reglamentaria— máxime cuando la descripción coincide con la de los libros registrales y no puede surgir ninguna duda respecto a la identidad de la finca, —lo mismo habrá igualmente de indicarse respecto al resto de este defecto 2.º en relación a la constancia del nombre del camino que sirve de separación con la otra finca, así como a la naturaleza de esta y el nombre y apellidos, en su caso, del propietario.

Considerando que en cuanto al defecto 4.º la indicada Resolución manifestó que en ningún caso podría calificarse como defecto que obstaculizase el ingreso en el Registro del documento calificado, las enmiendas o soberraspados realizados en la copia presentada, que en último término podrían ser subsanados a través de los medios establecidos en el artículo 243 del Reglamento Notarial, y que en nada afectan al documento en sí.

Considerando por último que en cuanto al defecto 3.º, el propio funcionario calificador reconoce en la Nota que se ha cumplido con lo establecido en los artículos 47 y 50 del Reglamento Hipotecario, al indicarse en la escritura el lindero por donde se ha efectuado la segregación; sin que pueda tomarse en consideración que no se haya hecho constar numéricamente la extensión superficial del resto, pues es indudable que al señalar la superficie de la totalidad del inmueble, así como la de la porción segregada y expresarse que ha quedado disminuida la primera en esta última extensión, una simple operación de restar despeja la cuestión matemática que podría plantearse.

Esta Dirección General ha acordado confirmar el Auto apelado que revocó los defectos 2.º, 3.º y 4.º de la Nota de calificación, únicos sobre los que se planteó debate.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 22 de marzo de 1973.—El Director general, Francisco Escrivá de Romani.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona.

MINISTERIO DEL EJERCITO

RESOLUCION de la Jefatura de Propiedades Militares de Castellón por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos y bienes que se citan.

Esta Jefatura de Propiedades Militares ha resuelto señalar el próximo día 21 del mes de abril de 1973 a las diez horas, para proceder correlativamente y en los locales del Ayuntamiento de El Toro (Castellón), al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los terrenos y bienes afectuos, por aplicación del Decreto 3375/1972, de 24 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 289).

La relación de los propietarios afectados cuya conformidad obra en poder de esta Jefatura, figuran expuestos en los tabloncillos de anuncios de los Ayuntamientos de El Toro (Castellón) y Abejuela (Teruel).

Castellón, 5 de abril de 1973.—El Jefe de Propiedades.—2.695-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 15 de marzo de 1973 por la que se conceden a la Empresa Manuel Hernández González los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de fecha 12 de diciembre de 1972 por la que se declara a la ampliación de la planta de empaquetado de plátanos en manjilas

propiedad de don Manuel Hernández González, emplazada en San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife) comprendida en Zona de preferente localización industrial agraria, incluyéndola en el grupo A de los señalados en la Orden de 5 de marzo de 1965 del citado Departamento.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa Manuel Hernández González de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife) por la industria indicada y por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de publicación de la presente Orden, los siguientes beneficios fiscales:

a) Libertad de amortización durante el primer quinquenio a partir del comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance aparezca reflejado el resultado de la explotación industrial de las nuevas instalaciones.

b) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la importación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, cuando no se fabriquen en España. Este beneficio se hace extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en España, se importen para su incorporación en primera instalación, a bienes de equipo que se fabriquen en España.

c) Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas del Capital que grave los rendimientos de los empréstitos que emita la Empresa española y de los préstamos que la misma concierte con Organismos internacionales o con instituciones financieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se destinen a financiar inversiones reales, nuevas. La aplicación concreta de este beneficio a las operaciones de crédito indicadas se tramitará en cada caso a través de la Dirección General de Política Financiera, de conformidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 9 de julio de 1971 en la forma establecida por la Orden de este Ministerio de 11 de octubre de 1965.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume la Entidad beneficiaria dará lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º de la Ley 152/1963, a la privación de los beneficios concedidos, y por consiguiente, al abono o reintegro, en su caso, de los impuestos bonificados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 15 de marzo de 1973.—P. D., el Subsecretario, Juan Rovira Tarazona.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías por la que se hace público habersé autorizado la celebración de una rifa benéfico-docente al Hogar Escuela de San Bult, de Valencia.

Por acuerdo de este Servicio Nacional de Loterías, de fecha 15 de marzo del año en curso, ha sido autorizada la celebración de una rifa benéfico-docente al Hogar Escuela de San Bult, con domicilio en Valencia, calle En Bianch, número 6, debiendo verificarse la adjudicación de los premios en combinación con los tres premios mayores del sorteo de la Lotería Nacional del día 24 de noviembre de 1973, que constará de 80.000 billetes.

Premios adjudicables: 1.º, un automóvil Seat, modelo 1.430, matrícula V-6770-E; 2.º, un automóvil Seat, modelo 124-D, matrícula V-6769-E; y 3.º, un automóvil Seat, modelo 600 E, matrícula V-6834-E.

Las papeletas de la rifa serán distribuidas al público por las personas que se relacionan, provistas del oportuno carnet, expedido por este Servicio Nacional: Don Eduardo Miragall Abad, domiciliado en Valencia, calle San Francisco de Borja, 18; don José Luis Miragall Muñoz, con el mismo domicilio que el anterior; don Ruperto Castellanos Díaz, con domicilio en Madrid, calle Esperanza S. Carrascosa, número 24; don Ubaldo Castellano Díaz, domiciliado en Madrid, calle Fereluz, número 45; y don Pedro Candela Ara, con domicilio también en Madrid, calle Fereluz, número 45.

Lo que se publica para general conocimiento y demás que corresponda, debiendo sujetarse la rifa a cuanto dispone la legislación vigente.

Madrid, 27 de marzo de 1973.—El Jefe del Servicio Nacional de Loterías, Francisco Rodríguez Cirugeda.—3.094-E.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 6 de marzo de 1973 por la que se aprueba el «Proyecto de ordenación de la zona limitrofe al embalse de Burquillo, en el río Alberche, con toma de agua no directa para el abastecimiento de Madrid».

Ilmo. Sr.: El Decreto 2495/1966, de 10 de septiembre y la Orden ministerial de 11 de julio de 1967, establecen la necesidad de formular proyectos de ordenación de las zonas limitrofes de los embalses para su utilización con fines recreativos que no perjudiquen los fines esenciales que motivaron la proyección y construcción de tales obras hidráulicas, a fin de que la actuación de la Administración y de los particulares se acomode a los principios jurídicos en él contenidos y constituyan norma de obligado cumplimiento.

La regulación administrativa de todo proyecto de ordenación de embalses y, por tanto, del de Burquillo, debe necesariamente contemplar el doble aspecto del dominio público y del privado, para aplicar en los supuestos del dominio público la legislación específica de Obras Públicas y de Aguas, y en los del dominio privado la del Reglamento de Policía de Aguas y sus Caudales y disposiciones concordantes, como el Decreto 2495/1966, de 10 de septiembre.

La utilización del dominio público tendrá que revestir la forma de autorización o concesión, según se trate de aprovechamientos comunes o especiales, condicionados unos y otros a determinadas limitaciones de espacio, situación y cantidad en orden a la seguridad de las personas y la salubridad de las aguas, para impedir cualquier aprovechamiento o disfrute anárquico o peligroso.

Asimismo, la utilización del dominio privado en la zona de policía de protección de embalse, que abarcará una extensión mínima de 500 metros, contados desde su máximo nivel normal, debe ser objeto de autorización previa por parte del Organismo competente del ramo, quien velará por que la explotación de los terrenos se haga sin menoscabo del fin primordial del embalse, que es el abastecimiento de aguas.

A estos efectos, y sin perjuicio de las competencias de los Municipios y otros órganos estatales, las autorizaciones que se otorguen por el Ministerio de Obras Públicas en esta zona tendrán carácter reglado, al exigirse unas determinadas prescripciones en orden a la construcción, densidad de edificación y distancias mínimas e instalación de aparatos depuradores de aguas y materiales residuales, que vienen impuestos por el propio proyecto de ordenación del embalse.

Por último, la situación de aquellas urbanizaciones, edificaciones o instalaciones existentes o legalmente aprobadas con anterioridad a la promulgación de esta normativa, deben tenerse en cuenta en la misma para permitir su continuidad o su legalización mediante el cumplimiento de las exigencias que resulten necesarias para conseguir una correcta depuración de los afluentes, o para decretar su abusividad cuando los interesados no quieran someterse voluntariamente a las mismas.

En su virtud, este Ministerio ha resuelto:

NORMA GENERAL

Las aguas y terrenos de dominio público y los terrenos de propiedad particular situados en las zonas de policía establecidas en el Decreto 2495/1966, de 10 de septiembre, del embalse de Burquillo, en el río Alberche, podrán ser utilizadas de acuerdo con las normas contenidas en las presentes instrucciones.

CAPITULO PRIMERO

Del dominio público

1. Embarcaderos.

1.1. Podrán establecerse embarcaderos, tanto de uso privado, individual o colectivo, como público mediante la correspondiente concesión administrativa, que se otorgará de acuerdo con lo establecido en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

1.1.2. Cuando la concesión tenga por objeto la construcción de un embarcadero para uso público, la licitación versará también sobre las tarifas, correspondiendo su otorgamiento al Ministerio de Obras Públicas.

1.1.3. En los Centros de interés turístico nacional se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 21.1 e) de la Ley 197/1963, sobre derecho de uso y disfrute de los terrenos de dominio público en favor de los realizadores de los mismos.

1.2. Mangas.

La salida de los embarcaderos hasta la zona de libre navegación definida en el apartado 1.7.º, se determinará en la concesión, siendo de cuenta de los concesionarios el balizamiento de la manga de salida.

1.3. Pesca.

1.3.1. Se permitirá el ejercicio de la pesca en todo el embalse, de acuerdo con las disposiciones vigentes.